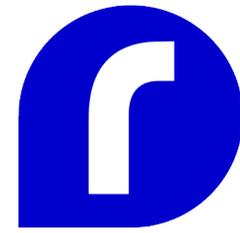


COVID-19 y crisis económica: La propuesta de Carlos Alvarado: Una colcha de retazos*



* Texto original publicado en:
Academia.edu

Luis Paulino Vargas Solís

Economista costarricense, catedrático universitario y actualmente director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED. Ha publicado doce libros y numerosos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría, categoría ensayo por su libro “El candado y la llave: ideología y realidad de la propiedad intelectual” (EUNED, 2010).
Correo electrónico:
lvargas@uned.ac.cr

Este escrito forma parte de una serie de documentos elaborados por investigadoras e investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, donde a manera de ensayo se presentan análisis y reflexiones sobre el cómo diversos aspectos de nuestra realidad cotidiana se han visto afectados a partir de la aparición del COVID-19.

Como respuesta frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19, esta propuesta es como al modo de una sábana de retazos, en la cual se cosieron tejidos finos –o que aparentan serlo– junto a algunas telas de dudosa calidad, y otras que parecen ser poliéster barato.

Las telas (que parecen) finas

Son dos, básicamente: el programa de créditos por ₡900 mil millones que se destinarían al financiamiento de las empresas, y, en especial, el programa de inversión pública que se nos anuncia. En este segundo caso, las cifras son muy notables: ₡3,1 billones para el bienio 2021-2022 y hasta ₡5,5 billones al 2022. Lo cual equivaldría, como promedio anual, a aproximadamente un 5% del valor de la producción nacional, o sea, del Producto Interno Bruto (PIB).

No recuerdo haber escuchado jamás a ningún gobierno plantear cifras de inversión pública por una magnitud comparable. Para los estándares históricos de Costa Rica, resulta, sin duda, una meta muy ambiciosa, aun cuando el monto necesario para superar la recesión y lograr relanzar un proceso de recuperación dinámico y vigoroso, debería ser incluso más elevado.

Dije que estos son retazos de la colcha, que aparentan ser de muy buena calidad. Está por comprobarse que efectivamente lo sean, y ello depende de la forma como estas propuestas sean planificadas, diseñadas y ejecutadas. Sobre eso, y hasta el momento, el gobierno guarda silencio. En lo que sigue plantearé lo que yo intentaría hacer si en mis manos estuviese decidirlo, o sea, lo que honestamente creo que debería hacerse.

Créditos por ¢900 mil millones

Es llamativo que sea una responsabilidad exclusivamente asumida por los bancos públicos. Frente a una situación crítica como la actual *¿qué justifica que los bancos privados puedan seguir en sus negocios fáciles de siempre, como si la situación excepcional que se vive no demandase un aporte especial?* Pero visto el peso de los intereses financieros, y la pleitesía que las élites políticas usualmente les rinden, la cuestión no extraña, aunque sí indigna. De cualquier forma, esto advierte acerca de la importancia de seguir teniendo una banca pública. En momentos críticos, ésta todavía nos puede ofrecer posibilidades, que, tratándose de la banca privada, resultan impensables.

En esto, como en tantas otras cosas, la comunicación oficial fue omisa: desconocemos los objetivos específicos que se persiguen, y los mecanismos concretos de implementación. Lo deseable y necesario es que esos créditos sean un colchón amortiguador que alivie los impactos de la recesión, y al facilitar el flujo de caja y proveer capital de trabajo, faciliten la sobrevivencia de las empresas que hoy atraviesan una situación problemática. El énfasis debería estar en las micro, pequeñas y medianas empresas, y en los emprendimientos de carácter social-solidario, sin que ello signifique dejar de lado las empresas grandes que pudieran estar en problemas. Pero todo esto demandaría reformular los criterios regulatorios bajo los cuales funciona nuestra banca, a fin de facilitar los trámites, conceder el más amplio acceso y las mejores condiciones de tasas de interés y plazos.

Claramente está haciendo falta que exista algún fondo de avales o garantías, o, en fin, algún mecanismo que respalde los créditos, de forma que ello sustituya las garantías de las que las empresas más pequeñas seguramente carecen. Ese fondo podría crearse tomando recursos hoy disponibles (pero básicamente inutilizados) en la banca de desarrollo, según la idea que, en su momento, formuló el expresidente Figueres Olsen.

Programa de inversión pública

Como ya adelanté, este programa tiene las dimensiones mínimas que la situación demanda, aunque probablemente no las dimensiones óptimas. Es de suponer que se financiará con fondos externos, pero precisamente porque lo deseable es que fuese incluso más grande, el gobierno debería desarrollar

una estrategia muy enérgica para atraer fondos externos en condiciones lo más favorables posibles. El discurso de los organismos internacionales, sugiere que hay oportunidad para lograrlo, pero ello demanda priorizar los intereses generales del país, y aplicar una estrategia a la vez muy pragmática y vigorosa, dejando de lado ciertas agendas ideológicas (las privatizaciones, por ejemplo) inevitablemente polémicas y conflictivas.

También deberían explorarse otras formas de financiamiento como, eventualmente, podría ser los fondos de pensiones, lo cual, sin embargo, exige desarrollar mecanismo financieros muy innovadores y garantizar procesos de ejecución muy expeditos. Infortunadamente, cuando de asuntos realmente importantes se trata, nuestro sistema financiero es muy poco imaginativo.

Pero, además, e igual de relevante, este programa de inversión debería ser planificado de forma que se maximice la generación de empleos, tanto directos como indirectos, la diseminación muy democrática de los ingresos en todos los estamentos sociales, en especial, los sectores más pobres y carenciados, y el beneficio directo a las regiones más empobrecidas y rezagadas. De forma explícita deberían fijarse metas y establecer mecanismos, para la incorporación de las mujeres. Todo lo cual supone que se propiciará la participación de nuevas empresas constructoras –incluido el ICE– así como de las comunidades, las municipalidades y organizaciones ciudadanas diversas. No puede permitirse que los proyectos sean acaparados por los tres ineficientes oligopolios en cuyas manos generalmente queda la ejecución de estas obras.

Debería asimismo haber una planificación en el tiempo: a corto plazo, centrarse en la ejecución de proyectos de fácil y rápida ejecución, que provean muchos empleos. Por ejemplo, y entre otras posibilidades, la reparación, mejora y ampliación de centros educativos, centros de atención sanitaria y hospitales; mejora de parques y espacios públicos y de parques nacionales; reparación y mejora de calles y caminos; acueductos, etc. Un interés especial debería ponerse en la infraestructura de cuidado y en el fortalecimiento de los servicios de cuidado. Y en esta etapa, como en las sucesivas, propiciar, tanto como sea posible, el *uso de insumos de producción nacional* (lo cual es necesario para garantizar que se creen muchos empleos indirectos).

Pero, además, este programa de inversión pública debería incorporar una perspectiva de largo plazo. Lo cual supone reconocer que la crisis sanitaria del Covid-19, no solamente tendrá implicaciones objetivas perdurables, que inevitablemente exigen replanteamientos significativos en nuestra economía, sino que, sobre todo, es un llamado de atención acerca de la inviabilidad de los modelos productivos y de consumo hoy prevalecientes. Este debería ser un criterio central, a la hora de planificar y diseñar estos proyectos de inversión pública, para, de esa forma, empezar desde ya a poner las bases de una nueva economía. Por ello su énfasis tendría que estar, menos en infraestructura vial, cuando sobre todo en transporte público, energías limpias, tecnologías verdes, agua y en la promoción de nuevos estilos de vida, que redefinan a profundidad nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza.

Estos son las telas que en esta sábana de retazos, aparentan ser de buena calidad. Para que realmente lo sean, a mi juicio deberán satisfacerse ese conjunto de condiciones que, a grandes rasgos, he descrito.

Telas que suscitan dudas

Simplificación de trámites

Imposible que ningún gobierno deje de mencionarla, puesto que es la obsesión ideológica favorita de las cámaras empresariales. Y no es, ni mucho menos, que carezca de importancia. Resolver ese asunto ciertamente sería positivo, pero a condición de que ello no signifique hacer fiesta con cuestiones importantes relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente, la higiene o los derechos laborales.

Obviamente, las cosas irían mejor si los cuellos de botella burocráticos desaparecieran y los procesos se movieran con fluidez. Pero por favor, no exageremos. Ya sabemos que a las cámaras empresariales les gusta dramatizar, pero el asunto no da para tanto. La simplificación de trámites reducirá el costo a la hora de crear una empresa nueva, y puede que luego, en el cotidiano funcionamiento de las empresas, aporte algunas otros ahorros adicionales. Pero eso no va a relanzar, ni de lejos, los mercados y las ventas, tal cual se requiere en estos momentos de recesión.

Flexibilización laboral

Este es uno de los retazos de peor aspecto en esta sábana. Claramente es una graciosa concesión a las cámaras empresariales, pero, además, y contrario al compromiso público asumido por el presidente Alvarado, es una idea que amenaza hacer recular el Estado social de Costa Rica.

No olvidemos que en materia laboral, un criterio es obligatorio: *debe protegerse la parte débil en la relación entre la patronal y las trabajadoras y trabajadores*. Seguramente las transformaciones económicas en curso hacen necesarios algunos cambios en materia laboral. Por ejemplo, la reducción de las jornadas de trabajo (tal vez a 35 horas semanales). Pero nada que pudiera implicar desprotección de la parte más débil es aceptable.

Un retazo que podría ser bueno...o tal vez no

No perdamos el tiempo en algunos parches que, de tan irrelevantes, parece haber sido agregados para tapan algún hueco. Por ejemplo: la atracción de

pensionistas del extranjero, el programa de producción de cáñamo, o el programa Alivio. Este último una cosita insignificante que se supone apoyaría a 200 MIPYMES exportadores (¡200 en un universo de docenas de miles de MIPYMES!).

La idea de impulsar las industrias así llamadas de “ciencias de la vida” (mejor fuera hablar de tecnologías médicas, farmacéutica y biotecnología) puede ser interesante. Siempre que no se limite a trasnacionales de zona franca, cuyo aporte efectivo a la economía nacional sigue siendo muy limitado. La cuestión tendría sentido si se lograra desarrollar un verdadero “clúster”, inserto a profundidad en la economía costarricense, mediante la incorporación efectiva de universidades, científicos y tecnólogos costarricense, y empresas de capital nacional. Pero, y de nuevo, se desconocen detalles.

¿Poliéster barato?

Hay también algunos elementos que, por artificiosos, arriesgan ser poliéster barato. Primero, el “ecosistema digital PYMES” (¿por qué excluyeron a las microempresas?), y, segundo, la “agricultura de precisión AGROINNOVA 4.0”. La pomposidad de los nombres es mala señal. Se adivinan detrás de esto, un trabajo de escritorio realizado por tecnocracias que poco o nada conocen de la realidad con la cual pretenden dialogar.

Propuestas como éstas, con su indisimulado tufo a ocurrencia, no alcanzan a disimular lo esencial: *la ausencia de una estrategia integral de apoyo e impulso a las MIPYMES, y la renuncia a un programa nacional de producción de alimentos*. He ahí lo realmente prioritario, lamentablemente omitido.

Las rasgaduras en la colcha

Por más que intenten disimularlo, se les nota que quedaron algunos huecos que afean el conjunto. La ausencia de una *propuesta tributaria realmente justa y progresiva* es uno de ellos. Complementado con un robusto esquema de subsidios progresivos, ello habría proporcionado uno de los mecanismos más eficaces para reanimar el consumo privado, aliviar la recesión de la economía y ayudar a las empresas que producen para el mercado nacional. Pero no olvidemos que, además, la crisis provoca muchísimo sufrimiento humano. Ello conlleva un *ineludible deber de solidaridad*, al cual, sin embargo, no se le está concediendo el lugar que corresponde. Se pone así, entre signos de pregunta, la calidad moral de la sociedad costarricense, y, sobre todo, el compromiso con la equidad por parte del presidente Alvarado. Al cabo, parece haberse impuesto la visión mezquina y egoísta de las cámaras empresariales.

Otro enorme hueco en la sábana, lo plantea *la ausencia del Banco Central*, imposible de disimular si para ello tan solo se apela a las tímidas y muy limitadas medidas de política monetaria que se han impulsado. Es esta una institución paralizada por el culto dogmático a una ortodoxia rancia y enmohecida. Parapetada detrás de esas “ideas zombi”, el Banco Central se niega a asumir sus responsabilidades para con la ciudadanía costarricense. El presidente Alvarado, omiso y tolerante, se hace así partícipe de esa grave irresponsabilidad.

Reflexión final

La crisis del Covid-19 conmueve, desde sus bases más fundamentales, los modelos económicos, de producción y consumo dominantes. Más aún: cuestiona integralmente nuestros estilos de vida. Pareciera que las élites políticas, el poder económico y los poderes mediáticos, todavía no se percatan de ello, o prefieren escudarse detrás de un vano ejercicio de negación.

Es algo que tiene implicaciones de mediano y largo plazo, pero, de hecho, sus consecuencias se hacen sentir hoy mismo, en la profunda recesión que golpea a la economía costarricense, cuyas secuelas seguirán vivas en los meses venideros. Es inútil pensar que pueda haber una recuperación del dinamismo económico y de la generación de empleos, con base en los estímulos provenientes de los mercados internacionales. Las exportaciones de bienes y servicios tardarán un plazo considerable antes de mostrar una recuperación significativa. El turismo no volverá a ser lo que era, quizá nunca, o por lo menos no a lo largo de varios años.

Por ello, el mercado interno cobra renovada importancia. Gústete o no a esa stirpe apátrida de los ideólogos de la transnacionalización, una versión remozada de la vieja tesis cepalina del “*desarrollo hacia dentro*” deberá ser aplicada.

La economía se recuperará desde “adentro” o no se recuperará. De ahí la importancia clave de los programas de inversión pública, como dinamo que empuje la inversión en el sector privado, la creación de empleos, la mejora de los salarios y, en último término, el restablecimiento de una situación fiscal saludable.

Ese ha de ser un proceso ojalá fundado en un **nuevo pacto social**: realmente justo, equitativo e inclusivo; genuinamente respetuoso con la naturaleza. Y que, a la vez, ello posibilite construir **una nueva economía**, mucho más productiva, innovadora e inteligente; mucho más racional desde el punto de vista de la naturaleza y sus equilibrios. Capaz entonces de propiciar, sobre bases profundamente renovadas, nuevas modalidades de vinculación e intercambio con el resto del mundo.